



**EXPEDIENTE: 074-07-2018-DEN**

**RESOLUCIÓN N° 567-2021**

**AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE LOS HABITANTES**, San José a las 13:05 horas del 17 de noviembre de 2021. Conoce la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes denuncia formulada por **[NOMBRE 1]** contra la **CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL**.

### **RESULTANDO**

- 1- Que mediante escrito presentado en el Despacho del Ministerio de Justicia en fecha 11 de julio de 2018, y remitido a esta Agencia en fecha 13 de julio de 2018, la señora **[NOMBRE 1]** presentó formal denuncia contra la **CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL** (en adelante **CCSS**) cuya pretensión es: *“Con fundamento en el artículo 24 de la Ley bajo estudio, solicito se declare con lugar la denuncia interpuesta, se tutele mi derecho mi (sic) Derecho al Olvido, se actualice con base en la rectificación y supresión el dato de morosidad de la base de datos de la CCSS que a mi nombre existe”*. (Visible a folios 01 al 05 del expediente administrativo).
- 2- Que mediante resolución N°201-2018 de las 11:20 horas del 11 de setiembre de 2018, se declara admisible la denuncia presentada por **[NOMBRE 1]** contra la **CCSS**. (Visible a folio 07 del Expediente Administrativo).
- 3- Que mediante resolución N°275-2018 de las 15:20 horas del 23 de octubre de 2018, se ordena el traslado de cargos a la **CCSS**, a efecto de que brinde informe sobre la veracidad de los cargos y aporte las pruebas que estime pertinentes. En el caso de la prueba testimonial, la misma deberá ser mediante declaración jurada debidamente autenticada por notario público. La omisión de rendir informe en el plazo estipulado hará que se tengan por ciertos los hechos acusados. (visible a folio 10 del Expediente Administrativo).
- 4- Que, mediante documento presentado a esta Agencia, en fecha 15 de noviembre de 2018, el señor **[NOMBRE 2]**, en su condición de apoderado especial administrativo de la **CCSS**, contesta el traslado de cargos en tiempo y forma, cumpliendo así con lo prevenido mediante resolución N°275-2018 supra citada. (Visible a folios 15 al 22 del Expediente Administrativo).
- 5- Que se han analizado los aspectos de forma y fondo de este expediente y se han realizado las diligencias útiles y necesarias para el dictado de la presente Resolución Administrativa.

### **CONSIDERANDO**

**I- HECHOS PROBADOS:** Concluido el análisis de la queja presentada y los autos de expediente, de relevancia para la resolución del presente asunto se consideran los siguientes hechos:

- 1- Que mediante escrito presentado en el Despacho del Ministerio de Justicia en fecha 11 de julio de 2018, y remitido a esta Agencia en fecha 13 de julio de 2018, la señora **[NOMBRE 1]** presentó formal denuncia contra la **CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL** (en adelante **CCSS**) cuya pretensión es: *“Con fundamento en el artículo 24 de la Ley bajo estudio, solicito se declare con lugar la denuncia interpuesta, se tutele mi derecho mi (sic) Derecho al Olvido, se actualice con base en la rectificación y supresión el dato de morosidad de la base de datos de la CCSS que a mi nombre existe”*. (Visible a folios 01 al 05 del expediente administrativo).
- 2- Que existen datos personales de la señora **[NOMBRE 1]**, referentes a cuotas obrero patronales, los cuales sobrepasan el plazo de 10 años, de conformidad con lo indicado en el oficio N° **SCJP-1038-2018**



del 14 de noviembre de 2018, suscrito por [NOMBRE 3], jefe de la Subárea de Cobro Judicial a Patronos a solicitud del Licenciado Quesada Azucena de la Dirección Jurídica de la CCSS. (Visible a 29 del Expediente Administrativo).

**3-** Que la señora [NOMBRE 1] solicitó a la CCSS la eliminación de sus datos personales de conformidad con lo establecido en la Ley N° 8968, indicándosele que su gestión es improcedente. (Visible a folios 02 y 24 del Expediente Administrativo).

**4-** Que de conformidad con la consulta de oficio realizada: <https://www.ccss.sa.cr/morosidad> por esta Agencia el día 16 de noviembre de 2021, se visualiza que la señora [NOMBRE 1] aparece con indicación de Cobro Judicial por el monto de ciento ochenta y nueve mil cuatrocientos colones exactos (¢189.414.00), información visible en el enlace de acceso público [LINK 1]

**II-HECHOS NO PROBADOS:** Ninguno de interés para el presente proceso.

**III- SOBRE EL FONDO DE LA PRESENTE DENUNCIA:** Manifiesta la señora [NOMBRE 1] que en la base de datos que mantiene la CCSS sobre morosidad aparece información sobre la misma, correspondientes a periodos que van desde el año 1993 al año 1995, y del año 2007 al año 2008, señala que de los montos adeudados no se le notificó que se haya tramitado alguna gestión de cobro administrativo o judicial, señala que sin embargo en la CCSS sin mayor detalle le ha indicado que existe un proceso judicial, expediente número [NÚMERO 1]. Señala que, a pesar de haber transcurrido el plazo de prescripción decenal, la institución le ha indicado que no pueden declarar la prescripción de oficio. Por ello, de conformidad con el artículo 6 de la Ley No 8968, solicita la CCSS cese la actuación administrativa de mantenerle en un registro con datos que no son actuales, veraces, ni adecuados para el fin que fueron recolectados. Por su parte indica la CCSS en su informe que la morosidad patronal es información de interés público, señala que los datos de la consulta de morosidad se limitan al monto adeudado, el lugar de pago y la situación. Señala que como puede observarse no se incluye ningún dato sensible, que la deuda en cuestión se encuentra en estado de cobro judicial. Expone que efectivamente la Administración no puede declarar de oficio la prescripción de cuotas obrero-patronales, sino que el administrado debe promover la prescripción en las vías correspondientes. El denunciado rechaza haber incurrido en alguna de las faltas señaladas en el artículo 28 de la Ley No 8968, aclara que la información contenida en el registro de morosidad es cierta, veraz y actual, que la simple existencia del echo no configura una falta administrativa. Señala la CCSS que el transcurso del tiempo no implica de manera automática que las deudas desaparecen, y que deban eliminarse registros existentes, señala una vez más que la prescripción debe ser declarada por parte de un órgano competente. Indica que para que existiese la falta administrativa que le atribuye, debería constar una resolución judicial o administrativa que declare prescrita la obligación. Señala que evidentemente la institución está en la obligación de recuperar el adeudo, ya que subsiste la obligación impuesta en el artículo 74 de la Ley Constitutiva de la CCSS, en el entendido de que la Caja tiene la obligación de mantener la información de morosidad patronal, esto en el tanto los adeudos no se extingan por alguno de los medios reglados de extinción de las obligaciones. Finalmente resalta el denunciado que, es absolutamente claro que la información sobre morosidad patronal es de carácter público y que bajo ninguna perspectiva ese registro lesiona la autodeterminación informativa, señala que es claro que el termino de 10 años no aplica para el caso en concreto, ya que en la especie aplican normas jurídicas que regulan la prescripción de las deudas por cuotas obrero-patronales, reconoce que las cuotas obrero patronales prescriben a los 10 años, lo cierto es que inciden causas de interrupción y suspensión de la prescripción, por lo tanto en el análisis de estas normas señala



que en el tanto la prescripción no sea declarada, la deuda se encuentra vigente y reitera una vez más que la prescripción no opera de pleno derecho sino a instancia de parte. Vistos los argumentos anteriormente expuestos y analizados los autos del expediente, se logra comprobar que efectivamente, mediante el acceso al enlace <https://www.ccss.sa.cr/morosidad>, la denunciante se encuentra en la categoría de cobro judicial, por un monto de ₡189.414.00. Por su parte, Ley No 8968 Ley de Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos Personales, señala en su artículo 6 lo siguiente: ***“Artículo 6.- Principio de calidad de la información: Solo podrán ser recolectados, almacenados o empleados datos de carácter personal para su tratamiento automatizado o manual, cuando tales datos sean actuales, veraces, exactos y adecuados al fin para el que fueron recolectados. (...) 1.-Actualidad: Los datos de carácter personal deberán ser actuales. El responsable de la base de datos eliminará los datos que hayan dejado de ser pertinentes o necesarios, en razón de la finalidad para la cual fueron recibidos y registrados. En ningún caso, serán conservados los datos personales que puedan afectar, de cualquier modo, a su titular, una vez transcurridos diez años desde la fecha de ocurrencia de los hechos registrados, salvo disposición normativa especial que disponga otra cosa. En caso de que sea necesaria su conservación, más allá del plazo estipulado, deberán ser desasociados de su titular (...)”*** (el resaltado no corresponde al original). Por su parte, el Reglamento a la Ley No8968, indica: ***“Artículo 11.- Derecho al olvido. La conservación de los datos personales que puedan afectar a su titular, no deberá exceder el plazo de diez años, desde la fecha de terminación del objeto de tratamiento del dato, salvo disposición normativa especial que establezca otro plazo, que por el acuerdo de partes se haya establecido un plazo distinto, que exista una relación continuada entre las partes o que medie interés público para conservar el dato.”*** Del principio de actualidad, se desprende la figura del derecho al olvido, que ya ha sido analizado tanto por esta Agencia como por la Sala Constitucional. Esta última se pronunció mediante resolución N°2007-003354 de las 13:36 horas del 9 de marzo de 2007 en los siguientes términos: ***“El derecho al olvido como elemento sustancial del tratamiento de datos personales. Como se dijo en la sentencia de esta Sala número 2002-00754 y en mucha de su jurisprudencia posterior (cfr. sentencias , 2002-08996, 2003-03489, 2003-03749, etc.), la calidad es un principio esencial del tratamiento de datos personales, lo cual implica que el operador de la base tendrá que almacenar únicamente información veraz, exacta, precisa y actual; el uso que se dé a los datos debe ser consecuente con el fin legítimo con que fueron recolectados, a partir del consentimiento informado de los afectados. Por su parte, la actualidad de los datos no significa llanamente que deben referirse a eventos actuales. Es claro que información relativa a determinados estados situacionales únicamente es actual si se refiere a condiciones persistentes al momento de su uso. No es actual un dato como el estado civil si éste no corresponde con su situación presente, aun cuando el dato histórico pueda revestir alguna importancia. En cambio, existen informaciones que a pesar de verdaderas, exactas y empleadas legítimamente, pueden de alguna forma resultar lesivas para el individuo. De éstas, las que produzcan consecuencias directas de acciones u omisiones ilegítimas de la persona, deben estar sujetas a un límite temporal, al cabo del cual deberán ser eliminadas de los registros o imposibilitado su uso. De lo contrario, las faltas (civiles, penales, administrativas, etc.) de una persona podrían generar consecuencias de carácter perpetuo, lo que es contrario a la letra y el espíritu del artículo 40 de la Constitución Política. (...)”*** (Resaltado no corresponde al original). Sobre ese mismo tema, esta Agencia resolvió mediante Recurso de Reconsideración presentado por la CCSS contra la resolución No. 3 de las 12:7 horas del 18 de febrero de 2016, expediente 074-12-2015-DEN, sobre las deudas de la CCSS: ***“Es criterio de esta Agencia, que, para el registro y posterior cálculo de pensiones a favor del asegurado, en que se contabilizan cuotas que el patrono no canceló a la Institución, podría la CCSS mantener un archivo de diferente naturaleza***



y estrictamente interno para esos efectos, sin que esto implique un record de morosidad permanente. Este registro interno podría ser, a modo de ejemplo, como el que se estila en el sistema bancario, en que si bien se mantiene un registro interno, que permite conocer el comportamiento crediticio pasado de sus clientes, no transfiere esa información a terceros, puesto que transcurrido, alegado y constatado el plazo de prescripción, deja de ser un dato de interés público, pero la entidad puede mantener ese registro para uso interno exclusivamente. Importante recordar que el dato de morosidad que maneja la CCSS es de acceso público (difusión), a través del enlace <https://sfa.ccss.sa.cr/moroso/>. Obsérvese que la Agencia no está negando el derecho a la denunciada de reservar bajo otras modalidades la información correspondiente para el cálculo de las pensiones, lo que está en controversia en este procedimiento de protección de datos, es el mantener el dato personal como un estado de morosidad, que además es difundido públicamente, y consecuentemente le trae al denunciante posibles aversiones para acceder a créditos o realizar actividades financieras. Aunado a lo antes dicho, se echa de menos en el libelo recursivo, cita de norma alguna, o jurisprudencia que haga constatar la especialidad de las deudas contraídas con la CCSS como lo alega la denunciada, y dónde reside el interés público a que hace alusión el recurrente. Obsérvese que la CCSS utiliza las vías ordinarias de cobro, ya sea en sede administrativa o en sede judicial a través de los Juzgados Especializados de Cobro, quedando claro entonces que a esas deudas se les da el mismo tratamiento que a otras, indistintamente del origen de las mismas. Además, tómese en cuenta que estamos ante un plazo de prescripción que está reconocido como un derecho, no solo a nivel de la Ley de Protección de Datos, sino que la prescripción de las deudas está reconocida a nivel sistémico y constitucional, ya que las deudas no son perennes e inmutables, y para eso la CCSS tiene sus tiempos y sus mecanismos legales; las dilaciones injustificadas de la institución en el cobro de sus créditos no pueden afectar a los deudores por un tiempo indefinido.” En el presente caso, tenemos que el periodo a cobro, según el oficio SCJP-1038-2018, corresponde a los años 1995 al 1996, donde es evidente que ha más que transcurrido el plazo establecido en el artículo 6 de la Ley No8968 antes indicado, además de que el proceso de cobro judicial llevado por la CCSS mediante la sumaria [NÚMERO 1], se encuentra en estado de inactivo, lo que demuestra la falta de interés por la parte promovente del mismo para darle el impulso procesal que corresponde, lo que demuestra que la CCSS no ha ejercido su derecho a cobrar en la vía correspondiente los adeudos de la denunciante, lo cual sin duda alguna vacía de contenido su alegado derecho de mantener el registro de morosidad en su base de datos, que además es de acceso público, con las consecuencias negativas para el denunciado, y en clara contravención de los derechos y principios recogidos en la Ley No. 8968. Aunado a lo anterior, resulta necesario relacionar el Principio de Actualidad establecido en la Ley No 8968 de repetida cita y el Derecho al Olvido regulado en el Reglamento a la Ley de marras, pues estos institutos tienen como finalidad que los administrados no sufran alguna especie de pena perpetua. Así se establece claramente en nuestra Constitución Política, mediante el artículo 40 el cual indica: “**Artículo 40.- Nadie será sometido a tratamientos crueles o degradantes ni a penas perpetuas, ni a la pena de confiscación. Toda declaración obtenida por medio de violencia será nula.**” (Resaltado no corresponde al original). Esta Agencia, no desconoce la importancia de la labor social que realiza una institución como la CCSS, pero también le corresponde hacer cumplir los derechos que la ley No. 8968 les ha generado a los ciudadanos, en cuanto a un legítimo tratamiento de sus datos personales. Aunado a lo que ya se indicó en la resolución citada supra, en cuanto que la institución cuenta con las vías ordinarias de cobro, ya sea en sede administrativa (para lo cual cuenta con instructivo), o en la sede judicial a través de los Juzgados Especializados de Cobro, las cuales puede utilizar para conseguir el cobro efectivo de los adeudos. Como se ha venido razonando con respecto a los hechos expuestos por la denunciante y de los argumentos





esgrimidos por el Apoderado de la CCSS, efectivamente la Ley N° 8968, tiene por objeto principal el garantizar los derechos fundamentales de los habitantes, concretamente el derecho de autodeterminación informativa regulado en el artículo 4 de la Ley de marras el cual indica: **“ARTÍCULO 4.- Autodeterminación informativa:** *Toda persona tiene derecho a la autodeterminación informativa, la cual abarca el conjunto de principios y garantías relativas al legítimo tratamiento de sus datos personales reconocidos en esta sección. Se reconoce también la autodeterminación informativa como un derecho fundamental, con el objeto de controlar el flujo de informaciones que conciernen a cada persona, derivado del derecho a la privacidad, evitando que se propicien acciones discriminatorias.*”, esto en relación a la vida privada de las personas, así como de la defensa de la libertad e igualdad con respecto al tratamiento automatizado o manual de los datos personales. Importante además mencionar que en este caso no se está aplicando el Principio de Actualidad y el Derecho al Olvido que se aplica a las deudas de carácter comercial que es de cuatro años, si no el plazo decenal, y que es aplicable a los datos personales en términos generales, no solamente a datos de información crediticia. Dado todo lo anterior, lo procedente es declarar CON LUGAR la denuncia incoada, y ordenar a la CCSS eliminar de sus bases de datos, la información de la denunciante que supere el plazo de 10 AÑOS, de conformidad con lo señalado en el artículo 6 apartado 1 de la Ley No 8968 supra indicado. Lo anterior deberá realizarse y notificarse tanto al quejoso como a esta Agencia en un plazo de **5 DÍAS HÁBILES**, contados a partir de la notificación de la presente resolución.

#### **POR TANTO**

Con fundamento en los numerales 1, 2, 4, 6, 16 de la Ley N° 8968; 11, 58, 67 y concordantes del Reglamento a dicha Ley:

- 1- Se declara con lugar la denuncia interpuesta, y consecuentemente se ordena a la **CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL** suprimir de su base de datos la información de la denunciante que supere el plazo de 10 AÑOS, lo anterior en un plazo de **5 DÍAS HÁBILES**, de lo cual deberá informarse tanto a la Agencia de Protección de Datos de los habitantes, como a la denunciante.
- 2- Contra la presente resolución, de conformidad con el artículo 27 de la Ley No. 8968, procede el recurso de reconsideración, el cual deberá presentarse en un plazo de **tres días hábiles** a partir de la notificación de la misma. **NOTIFIQUESE. -**

**Máster. Elizabeth Mora Elizondo**  
**Directora Nacional**  
**Agencia de Protección de Datos de los Habitantes**  
**PRODHAB**

alm